

Izquierda: asamblea realizada en las afueras del Ingenio Santa Lucía en el proceso de huelga y toma de ingenio desarrolladas en la década de 1960, algunos años antes de que el decreto de Onganía iniciara el cierre e intervención de 11 ingenios azucareros, a partir del año 1966. Fuente: Cattaneo 2020. Derecha: Imagen intervenida con la ubicación de las colonias del Ingenio Santa Lucía, Departamento Monteros, que desaparecieron producto de la violencia ejercida. A nivel espacial, estos asentamientos tuvieron un trato particular por parte del ejército, que las señalaba como los lugares por excelencia de la prédica subversiva. Algunas colonias fueron parcialmente ocupadas con bases militares, generando múltiples abusos en el ámbito cotidiano. Unas fueron ocupadas totalmente, constituyendo asentamientos abandonados y reubicando su población a la fuerza en otros poblados. Y otras resultaron totalmente arrasadas por topadoras. Fuente: Cattaneo 2020.

Las imágenes fueron diseñadas en el marco del trabajo colaborativo que se llevó a cabo para el diseño y realización de la exposición “La Violencia Económico-Militar en el Espacio” en la UACH por la Red Procesos represivos, empresas, trabajadores/as y sindicatos en América Latina, la Plataforma La Violencia en el Espacio y la Universidad Austral de Chile en diciembre de 2024, curada por Federico Geller, Guadalupe Marín Burgin y Carlos Salamanca. Diseño gráfico: Guadalupe Marín Burgin, 2024-2025.

Procesos represivos y reconfiguración productiva, territorial y social en el sur tucumano (Argentina, 1966-1983)

Repressive processes and productive, territorial, and social reconfiguration in the south of Tucumán (Argentina, 1966-1983)

CONSTANZA CATTANEO¹

ANA SOFÍA JEMIO²

SILVIA NASSIF³

Resumen

Este artículo examina las transformaciones sociales ocurridas en una franja del piedemonte ubicada al sudoeste de la provincia de Tucumán (Argentina) a partir de dos coyunturas críticas: el cierre de ingenios azucareros por la dictadura autodenominada “Revolución Argentina” (1966-1973) y la política sistemática de desaparición forzada desplegada desde el Operativo Independencia (1975) y profundizada por la última dictadura militar (1976-1983). Desde un enfoque situado, se analizan ambas coyunturas como crisis –en sentido gramsciano– que alteraron radicalmente las formas de vida y reconfiguraron el territorio. La investigación articula estudios previos, análisis de prensa, documentación judicial, entrevistas y fuentes gráficas y cartográficas, con el fin de identificar continuidades y rupturas entre ambos momentos. Se argumenta que, mientras la primera crisis generó resistencias que limitaron las transformaciones, la segunda consolidó, mediante el terror, un nuevo orden económico, social y político.

Palabras clave: Argentina, Tucumán, trabajadores, violencia estatal, reconversión productiva.

¹ Laboratorio de Investigaciones del Grupo Interdisciplinario de Arqueología y Antropología de Tucumán, Universidad Nacional de Tucumán. cattaneoconstanza@csnat.unt.edu.ar <https://orcid.org/0000-0002-4742-4455>

² Centro de Estudios sobre Genocidio, Universidad Nacional de Tres de Febrero / CONICET. <https://orcid.org/0000-0003-2216-8421> ajemio@untref.edu.ar

³ Instituto de Investigaciones Territoriales y Tecnológicas para la Producción del Hábitat (INTEPH CONICET-UNT), nassifsilvia@gmail.com

Abstract

This article examines the social transformations that took place in a strip of foothills located in the southwest of the province of Tucumán (Argentina) following two critical events: the closure of sugar mills ordered by the dictatorship that called itself the “Argentine Revolution” (1966-1973) and the systematic policy of forced disappearance deployed since Operativo Independencia (1975) and intensified by the last military dictatorship (1976-1983). From a situated perspective, both junctures are analysed as crises –in the Gramscian sense– that radically altered ways of life and reconfigured the territory. The research combines previous studies, press analysis, judicial documentation, interviews, and graphic and cartographic sources to identify continuities and ruptures between the two moments. It argues that while the first crisis generated resistance that limited the deepening of the transformations, the second consolidated, through terror, a new economic, social, and political order.

Keywords: Argentina, Tucumán, Workers, State violence, Productive restructuring.

1. Introducción

Este artículo analiza el proceso de transformación social acontecido en una franja de piedemonte tucumano a partir del impacto desencadenado por dos acontecimientos clave: por un lado, el cierre de ingenios azucareros dispuesto por la dictadura autodenominada “Revolución Argentina” (1966-1973), encabezada sucesivamente por Juan Carlos Onganía, Roberto Levingston y Alejandro Lanusse; y, por otro, la política sistemática de desaparición forzada de personas desplegada en el marco del Operativo Independencia -iniciada en febrero de 1975 bajo el gobierno constitucional del María Estela Martínez de Perón- y profundizada por la dictadura de 1976, encabezada inicialmente por Rafael Videla. En los años sesenta este territorio albergaba dos fábricas azucareras y múltiples colonias obreras vinculadas a cinco ingenios; fue también epicentro de la ocupación militar y asiento de, al menos, dos centros clandestinos de detención (CCD), uno de ellos instalado en una propiedad privada perteneciente a un ingenio.⁴

El enfoque adoptado se inscribe en una preocupación más amplia de las ciencias sociales por comprender las articulaciones entre los distintos golpes de Estado en la segunda mitad del siglo XX. En particular, se exploran los vínculos entre las dictaduras de 1966 y de 1976. Diversos autores han interpretado este período como una etapa de reconfiguración estructural del capitalismo argentino, atravesada por tensiones no resueltas entre proyectos contrapuestos de las clases dominantes y las formas de organización estatal.⁵ Estas líneas de investigación –incluso en sus diferencias– coinciden

⁴ Al momento de redactar este artículo, se encuentra pendiente la confirmación del inicio del juicio oral en la causa La Fronterita, que juzgará -por primera vez en Tucumán- a empresarios por delitos de lesa humanidad. Con distintos grados de avances, en Argentina existen distintos procesos contra actores del sector privado por su participación en crímenes de lesa humanidad, siendo emblemática la causa Ford, en la que fueron condenados en 2018 directivos de la empresa por su rol en la represión a trabajadores.

⁵ Entre los desarrollos clásicos de la sociología y la ciencia política se encuentran los trabajos de Guillermo O'Donnell (1982), quien caracteriza

en concebir ambas dictaduras como parte de un mismo movimiento de transformación estructural de la sociedad argentina. Retomando este gesto analítico, el presente trabajo busca estudiar las formas específicas de este movimiento en un espacio determinado, indagando cómo se expresan allí las tensiones y contradicciones que lo atraviesan, y qué transformaciones produce en las relaciones sociales. Nos apoyamos en las concepciones de Milton Santos (2000) para quien el espacio es la “unidad práctico-inerte de lo múltiple” (270), en tanto condensación de procesos sociales diversos y lugar privilegiado para su observación.

Para ello, proponemos leer ambos momentos –el cierre de ingenios y la represión estatal– como momentos de **crisis**. En un sentido gramsciano, estudiar una crisis implica delimitar como objeto de estudio un momento particular del movimiento de la sociedad en el que lo viejo muere y lo nuevo no termina de nacer (Gramsci 1930). Por eso, estudiar la crisis es abordar un terreno donde se resuelve la continuidad del movimiento (Tarditi y Podestá 1998). Siguiendo los desarrollos de Ana Quiroga (1998), la ruptura y desestructuración que genera una crisis social abren posibilidades de cambio, las que dependen de cómo las personas vivencien y respondan a la crisis, así como lo que se gesté socialmente. Así como las necesidades no tienen un único destino, las crisis tampoco están condenadas a ser superadas. Esta noción de crisis permite establecer un terreno común desde el cual leer los impactos de esos dos momentos cuyos factores desencadenantes fueron muy distintos. En definitiva, el enfoque que propone este texto es el análisis situado del impacto de estos grandes procesos de transformación, una mirada que permite entender cómo ambos acontecimientos reconfiguran, a través de crisis, un territorio específico.

Este enfoque constituye el aporte principal de este trabajo en relación con las producciones de conocimiento ya existentes sobre estos temas a nivel local. En los últimos años, han crecido notablemente las investigaciones históricas sobre el cierre de ingenios, tanto a nivel provincial como en distintas expresiones locales (Cattaneo 2023; Ciolli 2023; Bravo 2019 Mercado 2007; Nassif 2016; Pucci 2007), así como los estudios sobre la represión estatal en los años setenta y sus manifestaciones territoriales (Jemio 2021a; Cattaneo et al. 2019; Salvatore 2020). Si bien estos trabajos presuponen y, en general, esbozan conexiones entre ambos procesos, han sido menos frecuentes las exploraciones sistemáticas de las líneas de continuidad entre ellos. Algunos trabajos –incluidos los producidos por las autoras de este artículo– han comenzado a indagar en esas líneas a partir del seguimiento de casos de empresas o territorios específicos (Cattaneo 2022 y 2023; Jemio 2022b y 2022c; Nassif 2015). Este trabajo busca profundizar y contribuir a ese campo en desarrollo.

Proponemos como hipótesis de lectura de este proceso que las dos coyunturas analizadas produjeron una violenta transformación en las formas de vida previa de los sujetos a partir de cambios

al régimen de Onganía como la primera experiencia de un Estado burocrático-autoritario, y de Juan Carlos Portantiero (1977), quien lo inscribe en un contexto de empate hegemónico, en el que ninguna clase lograba imponerse de manera estable, generando crisis recurrentes. Desde la economía política, Eduardo Basualdo (2010) y Martín Schorr (2021) ubican a esta dictadura en el ciclo de transformaciones regresivas iniciado en 1955, subrayando su papel en la consolidación de un bloque de poder centrado en el capital concentrado y extranjero, y en la reestructuración del aparato productivo en favor de sectores oligopólicos. Desde la historia, trabajos como el Eidelman (2010) y Pontoriero (2022) analizaron las transformaciones del poder punitivo estatal en un ciclo largo que se inicia en los cincuenta y finaliza con la última dictadura militar.

Para la realización de este trabajo se han puesto en diálogo investigaciones previas realizadas por las autoras de este texto (Cattaneo 2022, 2023; Jemio 2021a, 2022b, 2022c; Nassif 2016, 2020, 2021)⁶, al tiempo que se las ha actualizado y profundizado a partir de bibliografía existente, material de prensa, especialmente el diario tucumano *La Gaceta*, informes documentales, material contenido en la causa judicial Operativo Independencia I, entrevistas realizadas a pobladores de aquellos territorios, como así también fuentes gráficas, fotográficas y cartográficas.

The map illustrates the study area in Tucumán, Argentina, highlighting various agro-industrial zones and towns. A dashed line delineates the 'Zona bajo estudio' (study area). Key locations include Ingenio San Pablo, Ingenio Mercedes, Ingenio Santa Lucía, Ingenio Nueva Baviera, Ingenio Fronterita, and Ingenio Los Laureles. Other towns shown are Villa Nougues, Manantial Independencia, San Miguel de Tucumán, Potrero de las Tablas, Ingenio Lules, La Reducción, El Bracho, Romeral, Esquina, Pala Pala, Villa Fiad, Acheral, Famallá, Tte. Berdina, Caspinchango, and Sauce Huascho. The map also shows the Salado River and the Camino de la Bella Vista.

⁶ Cabe señalar que entre las autoras de este artículo existen matices en torno a ciertas interpretaciones, así como en el uso de categorías como *genocidio* y *terrorismo de Estado*. Lejos de constituir un obstáculo, estas diferencias enriquecen el análisis y permiten una aproximación más compleja y articulada al proceso abordado. Para el uso de las categorías genocidio y Estado terrorista en el caso tucumano, ver Jemio 2021b.

2. El territorio bajo estudio

El espacio geográfico analizado se encuentra ubicado en Tucumán, provincia del norte argentino, a unos 35 km al sudoeste de la capital, en una zona del pedemonte de aproximadamente 20 km de longitud (Imagen 1), delimitada al norte por la finca Monte Grande en el departamento Famaillá y al sur por el ex Ingenio Santa Lucía en el departamento Monteros.

En la configuración de este territorio, la agroindustria azucarera tuvo un rol determinante –y lo continúa teniendo, aunque en menor medida–. En esa franja funcionaron dos ingenios azucareros, Santa Lucía y La Fronterita, con sus respectivas colonias⁷, y también ejercieron su influencia otros tres: el ex Ingenio Mercedes, que contaba con la colonia Monte Grande; el ex Ingenio Nueva Baviera, con las colonias Los Laureles, Tres Almacenes y Sauce Huacho; y, en menor medida, el ex Ingenio San Pablo –que cerrará tiempo después, en la década de 1990–, con la finca Nougués, ubicada en Caspinchango.

El Ingenio Santa Lucía fue fundado en 1882 y, desde 1907, pasó a manos de la Compañía Azucarera Santa Lucía, constituida por miembros de las principales familias tucumanas vinculadas al negocio del azúcar. Los nuevos dueños iniciaron una serie de modificaciones en el poblado, junto con la urbanización del pueblo, se produjo un paulatino anexamiento de tierras que culminó con la conformación de las colonias Las Mesadas, Santa Elena, Las Dulce, Negro Potrero, La Aceitera, Santa Mónica, Caspinchango, Fagalde y Los Sosas, entre otras (Mercado 2007). Para 1965, el ingenio contaba con 991 trabajadores registrados y producía 37 mil toneladas de azúcar, ocupando el sexto puesto en la provincia en participación en la producción nacional, detrás de San Pablo y La Fronterita, que ocupaban el tercer y cuarto lugar, respectivamente (Nassif 2015: 615–616 y 661).

El Ingenio La Fronterita ubicado en la localidad homónima, en el departamento de Famaillá, fue construido en 1923 y pertenecía a la sociedad José Minetti & Cía. Ltda. S. A. Comercial e Industrial, cuyos estatutos fueron aprobados en octubre de 1925 en la ciudad de Córdoba (PVyJ et al. 2015: 68). Ya en 1965, se había posicionado como uno de los ingenios –junto con La Corona– con mayor rendimiento de azúcar, incluso en comparación con los ingenios de Jujuy y Salta. Para ese entonces, contaba con siete colonias obreras, cuatro escuelas y una comisaría dentro de su predio, además de almacenes, clubes e iglesias (Jemio, Nassif y Wieder 2025). Hasta 1963, el Sindicato de ese ingenio fue dirigido por Mario Aparicio, quien fue electo ese año como secretario general de la Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera (FOTIA).

Monte Grande era una de las doce fincas que tenía el Ingenio Mercedes. En sus orígenes, este ingenio perteneció a la firma Padilla Hermanos –que luego se convirtió en la Sociedad Anónima Compañía Azucarera Mercedes– y, en la década de 1960, pasó a manos de otro consorcio familiar muy poderoso:

⁷ La elaboración de azúcar es una actividad agroindustrial que incluye la fábrica donde se elabora el azúcar y los campos donde se cultiva la caña, que suelen estar cerca de las plantas procesadoras para reducir los gastos de transporte y evitar la pérdida del contenido de sacarosa de la caña y, por lo tanto, la disminución de su rendimiento. Dentro de las plantaciones se ubicaron las colonias en las que habitaban los obreros que realizaban las tareas agrícolas. Las viviendas eran de propiedad del ingenio, otorgadas en tenencia precaria a sus trabajadores. Ver Nassif 2016.

fue comprado por Herminio Arrieta, quien en ese entonces era presidente de Ledesma S. A. Para 1965, empleaba a 2.254 trabajadores, contaba con 15 mil hectáreas de caña y producía 22 mil toneladas de azúcar, ubicándose en el puesto número 17 de la provincia en participación en la producción nacional (Nassif 2015: 615-616 y 661). En 1966, dos de los dirigentes más importantes de ese ingenio, Rafael de Santis y Agustín Nieva, formaban parte del secretariado de la FOTIA. La finca Monte Grande quedaba a 16 kilómetros de la fábrica, y tenía 2.300 habitantes⁸ distribuidos en ocho colonias que dependían de una administración. Había almacén, cancha de fútbol, una escuela primaria –que hoy sigue funcionando– y un consultorio externo del Hospital del Ingenio Mercedes (Jemio 2022b).

Las colonias Tres Almacenes, Sauce Huacho y Los Laureles formaban parte del Ingenio Nueva Baviera, una de las fábricas compradas por Ernesto Tornquist, quien fundó junto a Pedro Méndez la Compañía Azucarera Tucumana (CAT). Las colonias comprendidas en el territorio bajo estudio eran las más alejadas del casco del ingenio, a una distancia de entre 8 y 13 kilómetros. Para 1965, empleaba a 587 trabajadores registrados, molía 13 mil toneladas de azúcar y ocupaba el antepenúltimo puesto en participación en la producción nacional (Nassif 2015: 615-616 y 661).

Por último, en Caspinchango se ubican dos fincas compradas en 1950 por la familia Nougués, a través de sus dos firmas societarias: San Pablo S.A. y Nougués Hnos. A través de esta última, también controlaban el Ingenio La Providencia (Gianfrancisco 2021). Estas fincas pasaron a engrosar las tierras cultivadas por el Ingenio San Pablo, ubicado a 30 kilómetros de allí. Este ingenio, fundado por el francés Jean Nougués, fue el primero en instalarse en el pedemonte tucumano, hacia 1832. Para 1965, producía 50 mil toneladas de azúcar y ocupaba el tercer puesto en participación en la producción nacional (Nassif 2015: 615-616 y 661).

Esta breve caracterización permite advertir que la agroindustria azucarera operaba como una matriz estructurante del territorio. A partir de ella se configuraron la distribución poblacional, la red de infraestructura (ferrocarriles, escuelas rurales, clubes), las formas de ocupación productiva (ingenios, fincas, plantaciones) y las actividades complementarias. Asimismo, moldeó las organizaciones vinculadas a la producción y reproducción de la vida, así como dimensiones subjetivas e identitarias asociadas a prácticas solidarias construidas en torno al trabajo colectivo compulsivo y a la convivencia en espacios que coincidían como lugar de residencia, de trabajo y de sociabilidad (Mercado 2007; Rosenzvaig 1989; Taboada y Lobo 1996). Esa sociabilidad cotidiana fue también la base de una cultura sindical fuertemente arraigada en el territorio, articulada a través de la estructura de sindicatos de base que conformaban la FOTIA (Nassif 2021). En virtud de ello, la política de cierre de ingenios, que describiremos a continuación, produjo una desestructuración profunda y una crisis cuyo impacto trascendió ampliamente el plano económico.

⁸ Monte Grande no figura como localidad en los censos de la época. Se toma como fuente *La Gaceta*, 11 de noviembre de 1968.

3. El cierre de ingenios: crisis y reorganización

En el marco del proyecto de reestructuración de importantes aspectos del patrón de acumulación impulsado por la dictadura de 1966, el Estado comenzó a intervenir activamente en ciertos sectores productivos considerados "ineficientes" desde la lógica del capital concentrado. Esta política de "racionalización" no implicó una retirada del Estado, sino una reorientación de su rol en función de los intereses de los grupos económicos más poderosos (Rapoport y Spiguel 2005).

Entre los sectores intervenidos se encontraba la agroindustria azucarera, que venía arrastrando una profunda crisis desde mediados de la década de 1960. La crisis alcanzó su punto culminante en 1965, con una situación de sobreproducción relativa provocada por la exitosa zafra de ese año, que alcanzó aproximadamente 1.211.000 toneladas a nivel nacional. Hacia 1966, cerca de un tercio de esa producción había quedado sin vender, generando un excedente que agudizó las tensiones estructurales del sector. Ante este escenario, se delinearon distintas respuestas: mientras un sector significativo del empresariado azucarero trasladaba los costos de la crisis a los trabajadores, principalmente a través del retraso en el pago de salarios, los obreros organizados en la FOTIA propusieron diversas alternativas, entre ellas la estatización de la actividad (Nassif 2016).

El desarrollo de esa crisis, signado por esa intensa puja, tomó una dirección mediante una serie de intervenciones estatales orientadas a la reconfiguración estructural del sector (Pucci 2007), que en Tucumán beneficiaron principalmente a los grupos oligopólicos del sector y profundizaron el proceso de concentración monopolista de la industria azucarera en el país (Nassif 2016). Los dos resultados centrales de la política de la dictadura fueron el cierre de 11 de los 27 ingenios existentes en Tucumán y la prohibición de la siembra de caña para aquellos productores que poseían menos de tres hectáreas. Estas decisiones provocaron la destrucción de más de 50.000 puestos de trabajo⁹ y el empobrecimiento de miles de pequeños cañeros. Tucumán se convirtió, así, en una de las provincias con mayor índice de desocupación del país, en claro contraste con el crecimiento general del empleo durante ese período (Nassif 2015)¹⁰.

El fenómeno de la desocupación en tales magnitudes desestructuró la vida cotidiana de los afectados directos –los trabajadores despedidos y sus familias–, e instaló un “horizonte de amenaza” para el conjunto de la clase trabajadora. Se generó así una extendida sensación de vulnerabilidad frente a los acontecimientos y de riesgo de caer en la inexistencia social por desinserción (Quiroga 1998: 70). Esta situación se agravó aún más debido a que el cierre de los ingenios se produjo a lo largo de dos años, acompañado por una estrategia comunicacional plagada de rumores, falsas promesas, y amenazas que profundizaron la incertidumbre en torno al futuro de las fuentes laborales.

⁹ Por las fuentes disponibles es difícil cuantificar con precisión los empleos perdidos. Los autores consultados (Canitrot y Sommer 1972; Murmis y Waisman 1969; Pucci 2007) estiman que entre 1966 y 1969 se habrían perdido alrededor de 40.000 puestos de trabajo solo en la agroindustria. La cifra se incrementa sensiblemente si se considera también la mano de obra que dependía de manera indirecta de la actividad de los ingenios.

¹⁰ La tasa de desempleo en San Miguel de Tucumán durante el período 1965-1971 triplicó a la del Gran Buenos Aires (Medina 1974: 80).

Una de las consecuencias más graves de la abrupta caída del nivel de empleo fue la emigración masiva de una parte significativa de la población tucumana, que constituyó una verdadera sangría demográfica: más de 200.000 personas se vieron obligadas a abandonar sus lugares de origen en busca de empleo¹¹.

En muchas de las localidades donde operaban los ingenios cerrados, la crisis se profundizó con la clausura de los servicios básicos, ya que el acceso al agua, la recolección de residuos, la electricidad o la atención médica –entre otros servicios– solía estar garantizado por los propios ingenios. Como consecuencia, se produjo el rebrote de enfermedades directamente asociadas al aumento de la pobreza y un notable incremento de la mortalidad infantil (Nassif 2016). El debilitamiento del tejido social se manifestó, además, en un fuerte incremento de la deserción escolar, el aumento de la violencia intrafamiliar, el agravamiento del alcoholismo y otros padecimientos de origen social. A su vez, la emigración provocó la fragmentación de los núcleos familiares: muchas personas que abandonaron la provincia en busca de trabajo no lograron mejorar sus condiciones de vida y enfrentaron, además, un profundo desarraigo (Nassif 2016; Pucci 2007).

Mientras ello ocurría, la actividad agroindustrial continuó siendo central en la economía: tras la crisis, experimentó una recuperación y consolidó el proceso de concentración monopolista. Este reordenamiento impuso condiciones de trabajo cada vez más desfavorables, reforzadas por la amenaza constante de pérdida de empleo. Los datos sobre la superficie sembrada con caña registran que, tras una caída sostenida durante cinco años, a partir de 1971 comenzó una fase de recuperación que para 1973-1974 superó ya los niveles registrados en 1965 (Nassif 2015: 146).

En consecuencia, la crisis desatada por el cierre de ingenios atravesó al conjunto de la sociedad tucumana con efectos desiguales, al tiempo que para unos mantuvo –aunque empeoradas– sus condiciones de subsistencia, para una gran parte desarticuló las formas de producción y reproducción material de la vida y, con ello, alteró radicalmente los elementos estructurantes de la vida cotidiana –el espacio, el tiempo, los vínculos y los objetos– que dotan de sentido, continuidad y previsibilidad a la existencia.

En el territorio bajo análisis se produjo una verdadera reestructuración del mapa azucarero: entre 1966 y 1968, cerraron 3 de los 5 ingenios con influencia en la zona. El primero en cerrar fue Nueva Baviera. Cinco meses después, en febrero de 1967, cerró el Ingenio Mercedes por una decisión de su propietario Herminio Arrieta, también dueño del ingenio Ledesma de Jujuy. La patronal responsabilizó por el cierre a los trabajadores, que habían impulsado una toma entre julio y agosto de 1966 exigiendo el pago de los salarios adeudados (Jemio 2022b; Juárez 2018). El último en cerrar fue el Ingenio Santa Lucía, clausura que llegó luego de una larga pelea de los trabajadores y sus familias ante salarios

¹¹ Las series estadísticas oficiales de esos años tienen importantes falencias que impiden evaluar con precisión la emigración poblacional. Por ejemplo, el Censo Nacional de 1970 publicado por el INDEC contiene dos cifras diferentes de cantidad de habitantes en Tucumán (Ceballos 2000: 5), mientras que los resultados del Censo Provincial de 1968 fueron difundidos sólo de manera parcial. Pese a ello, los censos nacionales permiten realizar algunas aproximaciones significativas: en 1960 la población de Tucumán era de 773.972 habitantes, mientras que en 1970 había descendido a 765.962. Tucumán fue, así, la única provincia del país que registró una disminución de su población durante ese período, como resultado de una emigración que superó al crecimiento vegetativo. Ver Osatinsky y Paolasso 2012.

adeudados, cambios en las condiciones de contratación y rumores de despidos. En ese contexto, y en el marco de un plan de lucha lanzado por la FOTIA, en enero de 1967 la policía asesinó a Hilda Guerrero de Molina, quien se convirtió en un emblema de la lucha de los trabajadores tucumanos y del país (Cattaneo 2023; Nassif 2017).¹² Los únicos ingenios que quedaron en pie fueron La Fronterita y San Pablo.

Los datos disponibles permiten aproximarnos al impacto que esto produjo en términos de desempleo y migración. En base a datos provisorios del Censo de 1968, Canitrot y Sommer (1972) indican que los departamentos Famaillá y Monteros estaban entre los tres departamentos más afectados por la desocupación en la provincia. Mientras que Tucumán registraba un 13,5%, Famaillá marcaba 20,9%, seguido por Cruz Alta con 17,9% y Monteros con 17,5%. Con un impacto directo sobre la migración, este fenómeno hizo que tanto Monteros como Famaillá sean expulsores netos de población, aunque con una intensidad diferencial. La comparación entre los censos nacionales de 1960 y 1970 muestra una disminución neta de la población del 1% en Tucumán. En el caso de Famaillá, la caída fue de un 25% mientras que en Monteros de un 10% (Canitrot y Sommer 1972: 4).

Esta profunda desestructuración convivió con una transformación de la producción azucarera en favor de los dos ingenios que quedaron en pie, actividad que continuó siendo, a pesar de todo, la principal de la región. Entre 1965 –año marcado por la crisis de sobreproducción– y 1973, el Ingenio La Fronterita aumentó su producción en un 89% y el San Pablo en un 49%. Este aumento requirió, lógicamente, un mayor volumen de caña procesada. Existen indicios de que parte importante de esa materia prima provino de las colonias de ingenios cerrados, en cuyas tierras (que en ocasiones siguieron en manos de los mismos dueños, como Santa Lucía), se siguió produciendo caña, aunque ahora para ser procesada en otras fábricas. Según datos de 1977, el 93% de la caña de Monte Grande –antigua colonia de Mercedes– y el 84% de la producida en Laureles –antigua colonia de Nueva Baviera– fue procesada por el Ingenio La Fronterita. La producción de caña de estas dos localidades representaba el 25% del total molido por el ingenio ese año. Por su parte, el Ingenio San Pablo recibía el 94% de la caña producida en Santa Lucía y el 87% de la proveniente de Sauce Huascho –también ex colonia de Nueva Baviera–. Finalmente, La Providencia procesaba el 60% de la caña de Tres Almacenes, otra ex colonia de Baviera, mientras que el restante 40% iba a La Fronterita (Cámara General de Productores de Azúcar de Tucumán 1977).

3.1. Las respuestas sociales frente a la crisis y el rol de la cultura organizativa del mundo azucarero en su gestación

La crisis ocasionada por el cierre de los ingenios fue el desenlace de un largo proceso previo de deterioro de las condiciones de vida y de trabajo de los obreros azucareros, que tuvo un punto de inflexión con la dictadura de 1955. La FOTIA denunció activamente la eliminación de los puestos de

¹² Hilda Guerrero de Molina fue una de las mujeres que encabezó las ollas populares para alimentar a la población frente a la crisis azucarera. Era militante de la rama femenina del peronismo. Su esposo, trabajador del ingenio Santa Lucía, fue uno de los despedidos a finales de 1966.

trabajo como uno de los efectos de la mecanización que se agravó con la ya mencionada crisis de sobreproducción relativa de 1965. La crisis que generó el cierre de los ingenios impuso un nuevo escenario porque implicaba atender al mismo tiempo tres situaciones muy diferentes: la de quienes ya habían quedado desempleados por el cierre, la de quienes luchaban por impedir los establecimientos que se encontraban bajo amenaza de cierre y la de quienes permanecían con empleo, pero padecían peores condiciones de trabajo o incumplimiento de condiciones básicas de empleo, amparadas las patronales en la crisis reinante. Esto no dejó de producir divisiones al interior de las organizaciones obreras, pero no llegó a paralizar las protestas, en todo caso, las dispersó.

Si la acción de las organizaciones obreras, sociales y políticas no tuvo éxito en frenar la brutal transformación regresiva que implicó el cierre de los ingenios, la continuidad de los procesos organizativos si consiguieron gestar algunas respuestas para paliar la crisis de supervivencia que afectaba a una parte importante de la población tucumana. Las más importantes de estas medidas para la zona bajo análisis fueron las tomadas en el marco del “Operativo Tucumán” y pueden considerarse como un producto mediato de la organización obrera, en la medida que tuvieron como fin estratégico contener la conflictividad social que había generado una crisis de tales dimensiones.

El plan oficial prometía diversificar la estructura económica provincial a través de una transformación agraria e industrial y absorber, así, la mano de obra desplazada por el cierre de los ingenios. Consistía, por un lado, en un programa de inversión que propiciaba la instalación de empresas no azucareras, especialmente de capital extranjero, que buscaban reducir sus costos laborales y de materia prima radicándose en países atrasados, pero con mano de obra calificada, de acuerdo con las tendencias de la época (Giarraca et al. 1995; Boneo et al. 1973). Como la creación de empleo por estas vías seguía un ritmo ajeno a las urgencias de la desocupación, se creó de manera complementaria un Régimen de Trabajos Transitorios que consistía, básicamente, en distintas formas de subsidios o empleos estatales precarios.

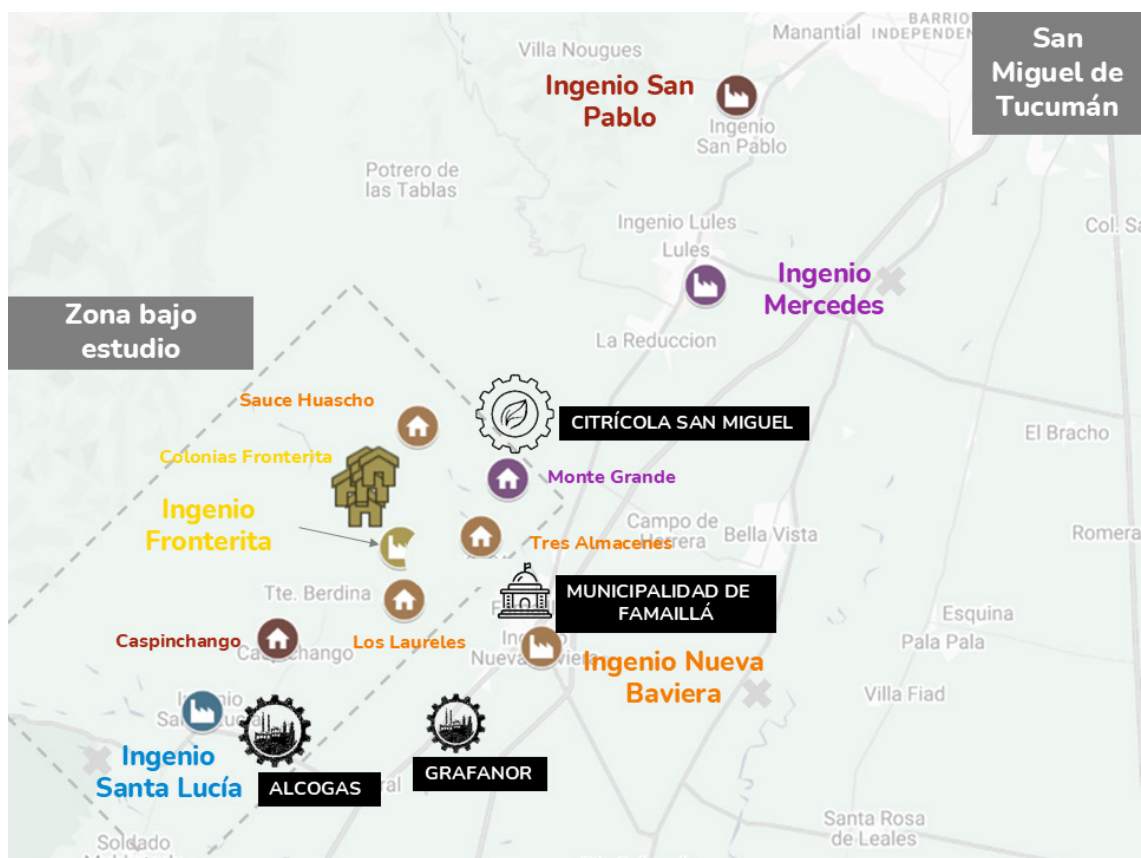
El Plan fue un verdadero fracaso si se lo mide por su objetivo central: generar trabajo. Solo la emigración masiva y la recuperación de la actividad azucarera en los primeros setentas permitieron que los niveles de desocupación en la provincia comenzaran a mejorar, aunque siguieron siendo más altos que a nivel nacional. Sin embargo, en la zona bajo análisis sí produjo una serie de transformaciones, algunas de las cuales sentarán las bases para modificaciones más profundas que ocurrieron en las décadas siguientes.

La experiencia de lucha previa tuvo un rol muy importante en la posibilidad de generar estrategias frente a la crisis. La experiencia acumulada por los trabajadores posibilitó la rápida organización y activación sindical en distintos espacios laborales que se abrieron o tomaron relevancia luego del cierre de los ingenios.¹³ Muchos de esos lugares recibieron a trabajadores provenientes del mundo azucarero que traían consigo años de vida sindical.

¹³ Para un estudio de caso sobre la fábrica Norwinco de Bella Vista, ver Jemio 2022; y sobre la fábrica Alpargata de Santa Ana, ver Ciolli 2021.

También jugaron un rol destacado los dirigentes de ingenios cerrados: a través de organizaciones como la Comisión Intersindical de Ingenios Cerrados y la regional de la CGT de los Argentinos, continuaron ejerciendo funciones de articulación con otros sectores combativos en la lucha antidictatorial. En un sentido más general, la identidad de “obrero azucarero” funcionó como una apoyatura simbólica desde la cual encarar las luchas del presente. En la prensa local y en el habla cotidiana se popularizó la expresión “ex obreros”, una fórmula que reivindicaba la condición previa de trabajadores ocupados y se negaba a fijar la identidad en la categoría de “desocupados”. Muchos de ellos continuaban movilizados, reclamando la reapertura de los ingenios cerrados o la instalación de plantas industriales prometidas por la dictadura (Nassif 2016).

Imagen 2. Ubicación de las empresas instaladas en la zona bajo estudio durante el “Operativo Tucumán”.



Fuente: Territorios de Memoria. CEG-Fundación Memoria e Identidades.

3.1.1. El ex Ingenio Santa Lucía y sus colonias

En Santa Lucía, tras el cierre del ingenio, la actividad agrícola continuó con el cultivo de caña, manteniendo la población en las colonias, aunque en el poblado emigraron unas 400 familias y creció el desempleo. El sindicato del ingenio, aunque sin obreros de fábrica y con una nueva dirección clasista, continuó representando a los trabajadores rurales y organizó la búsqueda de empleo a través del “Operativo Tucumán”. Muchos accedieron a empleos transitorios y, tras una larga lucha, en 1972 fueron incorporados a la administración pública provincial. En 1970, se inauguró la fábrica Alcogas en el ex ingenio, generando alrededor de cien puestos dirigidos a obreros más calificados (Mercado 2007). Ese mismo año se creó la Cooperativa artesanal y forestal Santa Lucía, dedicada a trabajos de aserrado, carpintería y herrería, aunque se disolvió pocos años después. Además, algunos pobladores comenzaron a trabajar en GRAFANOR, filial del grupo Bunge y Born, que desde su construcción en 1971 se convirtió en un importante polo de empleo para Famaillá y sus alrededores, llegando a emplear hasta 1400 trabajadores (Cattaneo 2023).

Las transformaciones laborales en Santa Lucía, especialmente la incorporación permanente de trabajadores transitorios del Operativo Tucumán en sectores industriales y de servicios, modificaron profundamente la organización territorial y la naturaleza del trabajo en las colonias. Este cambio redujo el interés por mantener la producción agrícola, acelerando el abandono de las tierras, ya que los trabajadores preferían la estabilidad del empleo industrial o administrativo, el que dificultaba compatibilizar ambas ocupaciones simultáneamente (Cattaneo 2022).

3.1.2. Monte Grande y el caso de la Citrícola San Miguel

Luego del cierre del Ingenio Mercedes, una gran cantidad de familias de Monte Grande terminaron emigrando, mientras que otras ensayaron distintas estrategias que incluían el empleo en la caña en época de zafra, la migración temporaria para otros trabajos rurales, como el de la fruta en Río Negro e, incluso, la recepción de dinero de aquellos familiares que migraban en busca de empleo a las grandes ciudades. Entre quienes se quedaron, hubo un intento de cooperativización, iniciativa que tenía una cierta historia en el mundo azucarero, que involucraba no solo a la FOTIA, sino también a los cañeros (Bustelo 2017). En 1968 se constituyó la Cooperativa Fray Santa María de Oro, integrada por 247 ex trabajadores del ingenio y constituida en Monte Grande (*La Gaceta*, 7-9-1968), que recibió del gobierno provincial la promesa de una parte de las tierras del Ingenio Mercedes en esa localidad, a través de las cuales se cobraría las deudas impositivas que tenía esa firma. Los planes se frustraron: ese mismo año las tierras fueron vendidas a una empresa que comenzaba por entonces su expansión: la Citrícola San Miguel.

Para los sesenta, la producción citrícola en Tucumán no era nueva. En la zona de Famaillá, sin embargo, tuvo un impulso particular a partir del cierre de los ingenios: la producción de limón había pasado de 31.200 toneladas en el período 1966/1967 a 150.000 toneladas en el período 1972/1973 (Secretaría de Estado y Planeamiento y Coordinación 1977: 116 y 161). Este despegue fue producto

de la combinación de algunos factores. El virus de la tristeza¹⁴ había hecho estragos en los cítricos dulces, que dominaban hasta entonces las plantaciones de ese rubro. Esto disminuyó, por un lado, la superficie general de cítricos sembrados. Y llevó, por el otro, al reemplazo de los dulces por el limón, resistente al virus (Batista Zamora 2014). Ello se potenció con un elemento clave: la explotación agroindustrial del fruto. Es que para esta época se comenzó a obtener y comercializar aceite esencial de limón, con múltiples usos comerciales en farmacia, perfumería, elaboración de dulces, etc. Rubén Porta, que fue dirigente sindical de fábrica en la Citrícola San Miguel, sintetiza así el salto que implicó el procesamiento industrial: “entraba limón y salía agua sucia”¹⁵. Nada se perdía. En esta transformación tuvo una incidencia importante la política de incentivo industrial que impulsó el Comité Operativo Tucumán a raíz del cierre de ingenios.

La llegada de la Citrícola San Miguel a Monte Grande implicó la creación de fuentes de empleo para los pobladores de la zona y produjo, al igual que en Santa Lucía, transformaciones poblacionales: la empresa relocizó a la mayoría de las familias que quedaban distribuidas entre las 8 colonias que conformaban Monte Grande. Las ubicó en la Colonia 1, un predio ubicado frente a la administración de la finca. En un comienzo, las casas eran precarias y sólo la presión del Sindicato del Ingenio La Fronterita logró que la empresa diera una respuesta habitacional a sus trabajadores. Es que en la recién comprada finca Monte Grande, al principio no había limones sino caña. Y la mayoría de quienes habían quedado viviendo en la finca trabajaron para la Citrícola en distintas tareas agrícolas, que incluyeron el reemplazo paulatino de la caña por los limones. Fue por esa actividad mixta, en la caña y el limón, que los trabajadores de Monte Grande, antes de pretender armar un sindicato del limón, ya tuvieron una organización dispuesta a defenderlos.

3.1.3. Las otras colonias: estrategias múltiples

En Laureles, Sauce Huascho y Tres Almacenes, todas colonias del cerrado ingenio Nueva Baviera, luego de importantes migraciones, la población que permaneció se sostuvo con el trabajo en la caña, que continuó pese al cierre de la fábrica, y combinó esta actividad con otros trabajos rurales en las quintas de verduras de la zona y en otras provincias de la Argentina.

En todos estos lugares, ejerció una importante gravitación el ingenio La Fronterita, cuyos trabajadores pese a no ver cerrada su fuente de trabajo no dejaron de sentir los efectos de la crisis. Por un lado, y aprovechando tal situación, la firma decidió desarmar una de sus colonias, la 4, y, para ello, alentó a sus trabajadores a desarmar sus casas, e, incluso, ofreció facilidades para que adquirieran sus propios terrenos. Muchos de ellos fueron a parar a estas localidades aledañas que habían sido colonia. Por el otro, el ingenio redujo puestos de trabajo y tomó medidas que implicaron un empeoramiento en las condiciones de vida de sus trabajadores, en un contexto marcado por una abundante disponibilidad de mano de obra. Esta situación también afectó a los pequeños y medianos productores cañeros,

¹⁴ El virus de la tristeza de los cítricos es una enfermedad viral que afecta principalmente a árboles como naranjos, limoneros y mandarinos.

¹⁵ Rubén Porta, entrevista por Ana Sofía Jemio, 24 de abril de 2021, transcripción Fabricio Nicolás Nicastro Torres y Carlos Manuel Juárez.

quienes, ante el cierre de otros ingenios de la zona, debieron competir por colocar su producción en un mercado más restringido. Algunas de estas políticas encontraron resistencia en los trabajadores recién a partir de 1973, con el inicio del tercer gobierno peronista, cuando asumió la conducción del sindicato una dirección combativa.

3.2. Continuidades y nuevas formas de organización

En suma, la crisis desatada por el cierre de ingenios implicó para amplios sectores sociales una fractura de los elementos estructurantes de la vida cotidiana. Esta discontinuidad no fue solo una pérdida material, sino una desestructuración de los marcos de sentido que regulaban la experiencia. Este efecto desestructurante de la crisis pudo en parte procesarse, en este caso, a través de procesos de reorganización colectiva. La experiencia acumulada en el mundo del trabajo azucarero –con sus prácticas sindicales, sus formas de sociabilidad y sus redes solidarias– funcionó como soporte para enfrentar la crisis. El fin abrupto de la condición de trabajadores azucareros que implicó el cierre de ingenios y la desocupación no significó la discontinuidad en su identidad como tal: la pelea por un lugar en el mundo laboral no azucarero se hacía desde una cierta cultura y experiencia organizativa forjada al calor de un mundo organizado por el azúcar. Esta experiencia no se expresó sólo bajo la forma sindicato, sino que asumió otras modalidades también gestadas bajo el impulso de los trabajadores azucareros. En este sentido, la experiencia previa –sedimentada en organizaciones, formas culturales de leer el mundo, prismas de comprensión de los conflictos, etc.– cumplió una función de sostén para hacer frente a la crisis social y elaborar salidas colectivas.

La dura derrota que había sufrido la clase obrera tucumana con el cierre de ingenios logró quebrar articulaciones que la FOTIA había construido trabajosamente. Logró, también, desactivar por un tiempo el rol de conducción del movimiento popular que había ejercido la organización sindical más grande de la provincia, esa que nucleaba a los trabajadores de lo que seguía siendo, sangría mediante, la principal actividad económica de Tucumán.

Ese desgajamiento no fue menor. Pero en el período que se abre con las elecciones de 1973, la fuerza social que había logrado sostenerse y articular alianzas con distintos sectores en la lucha antidictatorial logró colocar otra vez en el centro de la pelea al principal gremio de la provincia, ese que efectivamente movía el fiel de la balanza. Recuperaron los sindicatos de ingenio, desplazaron a la conducción dialoguista de la FOTIA y recomenzaron la pelea volviendo a exigir que se garantizaran los puestos de trabajo frente a los intentos de mecanización con las cosechadoras integrales, que se reabrieran ingenios y que se crearan nuevas fuentes de trabajo, entre otras cuestiones.¹⁶

¹⁶ En la huelga de 1974, el pliego de reivindicaciones incluía: una legislación azucarera sin intervención del monopolio; la anulación de las leyes azucareras de la dictadura militar; la creación de nuevas fábricas azucareras que absorban la capacidad de producción de materia prima que tiene Tucumán; la reapertura del Ingenio Esperanza; un obrero y medio efectivo por cada mil surcos de caña; contra la aplicación de la máquina cosechadora integral sin la creación paralela de fuentes de trabajo nuevas, agrícolas e industriales (Taire 2008: 59-60).

Con el cierre de los ingenios, los trabajadores habían sufrido una derrota, pero se propusieron revertirla durante el fin de la dictadura y los inicios del tercer gobierno peronista. En ello jugó un rol fundamental la posibilidad de lectura de la crisis como un problema colectivo y la experiencia organizativa que traían los trabajadores desde hacía décadas, que hizo posible gestar alternativas frente a la crisis. Ello se vio de manifiesto en la gran huelga obrera de 1974, en la que retomaron prácticas democráticas previas al cierre como los congresos de delegados promovidos por la FOTIA, junto a la realización de asambleas en los lugares de trabajo, de las que participaron no solo los trabajadores sino también los pobladores y el movimiento estudiantil.

En todo el proceso que hemos descripto, el epicentro de la crisis social estuvo en las transformaciones económicas que alteraron radicalmente las bases de sustentación de la vida de las poblaciones de la zona. No obstante, estas medidas no prescindieron del uso de la violencia estatal. La dictadura militar utilizó a las fuerzas represivas para garantizar el cumplimiento de ese objetivo y las siguió utilizando, con variada intensidad, cada vez que se produjeron resistencias contra los efectos de esa crisis (Nassif 2020). Esta violencia estatal implicó represiones en las calles, encarcelamientos e, incluso, el asesinato de manifestantes. No obstante, no fue suficiente para fragmentar y desactivar los procesos de organización popular. Ese fue, en cambio, uno de los objetivos centrales del tipo de violencia estatal desplegado a través de la política sistemática de desaparición forzada de personas que, en Tucumán, comenzó en febrero de 1975.

4. Genocidio y terrorismo de Estado

A mediados de la década de 1970, Tucumán vivió una nueva crisis de efectos igualmente desestructurantes que la del cierre de ingenios: se inició con el Operativo Independencia y continuó durante la dictadura militar de 1976-1983. Como planteamos en la hipótesis central de este artículo, ambas crisis implicaron la ruptura, discontinuidad súbita y desestructuración del orden previo, pero difieren los mecanismos desencadenantes de esa ruptura, así como las alternativas que desde el campo popular lograron gestarse para su resolución.

En la primera de ellas, el cierre de ingenios despojó súbitamente a miles de trabajadores de sus medios de reproducción, alterando así radicalmente los elementos estructurantes de la vida cotidiana. En la segunda coyuntura, esa desestructuración se desencadenó a través de una amenaza de muerte de un tipo específico –la desaparición forzada–, lo bastante masiva y ambigua como para convertir el terror en presencia ineludible. Tanto la privación de los medios materiales de existencia como la amenaza sobre la propia vida operaron no solo como métodos coactivos, sino como motores de una transformación más vasta de las relaciones sociales. En lo que sigue, abordaremos primero las características de la política de desaparición forzada en Tucumán y sus políticas complementarias. Definiremos, luego, qué entendemos por "terror" y cómo este se vincula con la crisis social. Finalmente, examinaremos los efectos concretos de tales políticas en el territorio bajo análisis.

4.1. Inicios del plan sistemático de desaparición forzada de personas

En febrero de 1975, la presidenta María Estela Martínez de Perón ordenó a las Fuerzas Armadas y de seguridad aniquilar el accionar de "elementos subversivos" en Tucumán (Decreto Secreto N.º 261/75).¹⁷ Esta operación, que luego se conoció como Operativo Independencia, fue publicitada como una operación antiguerrillera destinada a combatir el frente rural del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), brazo armado del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), instalado alrededor de mayo de 1974 en el sudoeste de la provincia, en el territorio que estamos analizando (Jemio 2021a).

Con la participación de todas las fuerzas represivas estatales y bajo la conducción del Ejército, se instauró una represión de nuevo tipo que consistía en el secuestro de personas y su reclusión, tortura e interrogatorio en espacios de detención clandestina (EDC)¹⁸, donde se decidía su liberación, legalización o ejecución con el posterior ocultamiento de sus cuerpos. Entre 1975 y 1983 funcionaron al menos 130 espacios de detención clandestina (EDC) distribuidos en toda la provincia por los que pasaron al menos 1818 personas secuestradas en Tucumán y en las provincias limítrofes.¹⁹

En el sur tucumano, el Ejército desplegó, además, una política de ocupación territorial. Cientos de efectivos instalaron bases y campamentos militares en los pueblos azucareros ubicados a lo largo de la ruta 38, esos mismos pueblos que habían resistido tenazmente la embestida económica de la dictadura anterior y que se habían empeñado en defender sus medios de vida. En esa zona la profundidad de la política represiva fue tal, que existen pueblos que registran 1 víctima cada 26 habitantes, siendo el promedio de la zona sur en general de 1 víctima cada 238 habitantes y el provincial, 1 cada 538 habitantes (Jemio 2021a).

Como ha sido señalado en la abundante bibliografía existente, el objeto de persecución de tal despliegue fue la figura ambigua del "delincuente subversivo", una definición lo suficientemente precisa como para denotar un campo de prácticas (aquellas que subvierten el orden occidental y cristiano) pero lo suficientemente amplia como para no saber con precisión qué tipo de acciones caen o no dentro de ese campo de persecución (Franco 2012; Jemio 2022a; Périès 2009). Así, cada una de las personas

¹⁷ Sobre el Operativo Independencia consultar Jemio 2021, y la compilación editada por Santiago Garaño y Ana Concha Bocanegra (2022).

¹⁸ La categoría EDC que se utilizará en este trabajo incluye todo lugar donde haya permanecido secuestrada clandestinamente al menos una persona. Todos cumplieron una función dentro del sistema coercitivo clandestino, pero no todos llegaron a ser centros clandestinos de detención, nombre con el que se conoce a los campos de concentración argentinos. Ver: Jemio 2021a.

¹⁹ Las estadísticas sobre víctimas y EDC utilizadas en este artículo provienen de la Base de Datos Genocidio en Tucumán 1975-1983, actualizada a septiembre de 2024. Desarrollada bajo la coordinación de Ana Sofía Jemio y Julia Vitar, esta base es una iniciativa conjunta del CEG UNTREF y la Fundación Memoria e Identidades del Tucumán (FMIT) y se sostiene y amplía a través del trabajo de estudiantes de grado y graduados de la Universidad Nacional de Tucumán. En este texto será referida como Base de datos CEG/FMIT. La unidad de registro de esta base son personas liberadas, asesinadas y desaparecidas que, en algún momento de su trayectoria represiva, pasaron por Tucumán. Para cada una, se consigna edad, género, situación, fecha y lugar de secuestro, ocupación y militancia, y los distintos EDC por los que pasó. Utiliza como fuente sentencias judiciales emitidas por tribunales orales y por instancias inferiores y documentos de acusación producidos por el Ministerio Público Fiscal (MPF), luego de haber concluido investigaciones en causas por delitos de lesa humanidad. Se incluyen, además, víctimas de desaparición forzada que no han sido objeto de procesos penales, pero figuran en el listado oficial de víctimas que elabora la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de la Nación, llamado Registro Único de Víctimas del Terrorismo de Estado (RUVTE).

secuestradas constituía la ocasión para que la advertencia y amenaza se expanda a cada hogar, lugar de trabajo o entorno que percibía una ausencia (la del desaparecido) o una presencia (la del sobreviviente).

Esa amenaza fue amplificada y multiplicada a través de mecanismos de control poblacional. Los censos, las razias, los controles de identidad, las requisas en las casas que se implementaron a lo largo y ancho de la provincia, pero con especial profundidad en el sur tucumano, fueron la ocasión para inscribir en los cuerpos una noción cabal de la arbitrariedad del poder y la impotencia en la que dejaban sumidos a los sujetos. Estas estrategias fueron acompañadas de las llamadas “campañas de acción cívica” que consistieron, básicamente, en políticas de asistencia a la población. Con medidas que incluyeron desde partidos de fútbol entre soldados y lugareños hasta entrega de pensiones, construcción de viviendas y obra pública, estas acciones tuvieron como finalidad más evidente legitimar la intervención del Ejército. Pero estas políticas implicaron, también, nuevas formas de interpelar a quienes eran objeto de asistencia. Ya no se le hablaba al trabajador sino al “buen pobre”, ya no se apuntaba a garantizar derechos sino a prevenir la subversión (Jemio 2021a).

Hasta aquí hemos identificado tres mecanismos interrelacionados que, combinados, dieron lugar a una política de terror. Entendemos por terror no un miedo exacerbado de carácter individual, sino un modo de ejercer el poder que instrumentaliza la violencia física para clausurar relaciones sociales y moldear conductas en quienes sobreviven. En palabras de Leo Lowenthal (2013), su núcleo consiste en “la interrupción de la relación causal entre lo que una persona hace y lo que le sucede” (49): la arbitrariedad del poder convierte cualquier acto –por respetuoso de la norma que sea– en potencial motivo de castigo. Así, el terror no busca disuadir, sino sumir al sujeto en la impotencia, privándolo de la capacidad de calcular o prever las consecuencias de sus acciones (Corradi 1996).

Decir que la desaparición forzada fue el detonante de una nueva crisis social no alude solo a la represión directa sobre miles de familias u organizaciones populares, ni se reduce a las amenazas que inhibieron quizás la solidaridad o las ideas consideradas peligrosas. Nos referimos, sobre todo, a la desestructuración de las apoyaturas materiales y simbólicas que posibilitaban formas de resistencia colectiva, como lo habían hecho hasta ese momento. Así, al poner en cuestión las pautas culturales, experiencias, tradiciones, visiones del mundo y lazos solidarios contruidos a lo largo de décadas por los sectores obreros y populares, el terror clausuró repertorios previos de acción y obligó a cada sujeto y a cada comunidad a construir nuevas estrategias de supervivencia.

Todo ello agravado y profundizado por las políticas implementadas a partir del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, que clausuró todos los espacios de participación política, gremial y ciudadana; teniendo particular efecto entre los trabajadores la intervención militar de la FOTIA, que impidió la realización de acciones coordinadas de protesta como antaño.

Como en cualquier crisis, esta desestructuración de las formas previas, del orden previo, no tuvo una única, ni unívoca salida. Pero sí impuso una transformación porque implicó (por lo generalizado de la amenaza) su registro y el despliegue de formas de lidiar con ella.

Por último, si esta forma de poder político-represivo fue el epicentro de la crisis, es decir, la variable central que motorizó una desestructuración no dejó de operar como un factor habilitante de transformaciones más generales del orden social. En particular, de la profundización de la política de concentración y "racionalización" económica en beneficio de los monopolios azucareros que, tal como señalamos, ya se había iniciado en el período previo. A partir de 1976 se intensificó la eliminación de mano de obra, la reducción de puestos de trabajo y las significativas pérdidas de conquistas económicas y políticas. Éste fue el objetivo que siguió el disciplinamiento de la mano de obra. Fue de este modo que, por ejemplo, la cosechadora integral finalmente pudo ser impuesta en beneficio de las ganancias de los monopolios azucareros y dejando en la miseria a miles de obreros (Nassif 2015). Así, el terror funcionó simultáneamente como un instrumento de control social y como un mecanismo de acumulación económica, cerrando el círculo que enlaza represión política y reestructuración del modelo azucarero.

4.2. Organización de la represión en el territorio

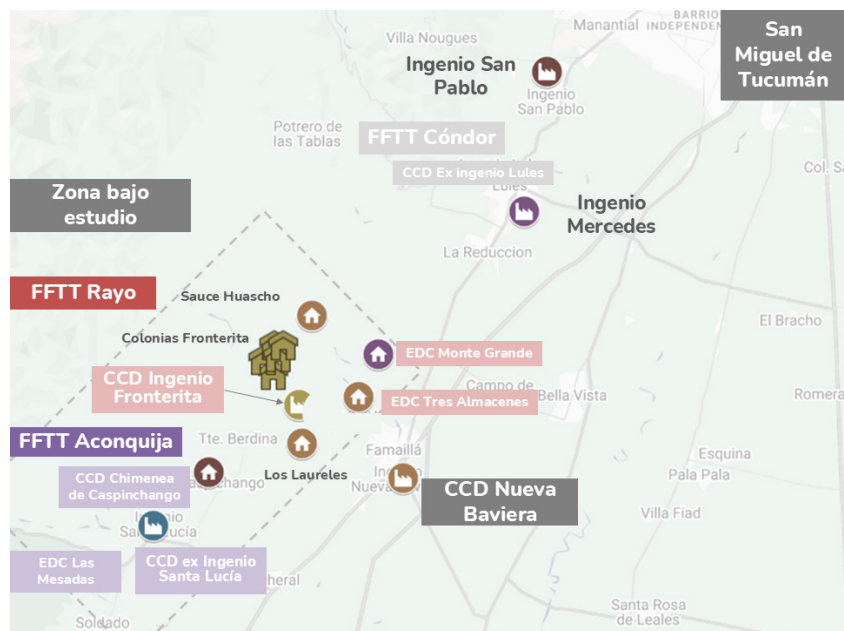
El territorio que estudiamos fue epicentro de la zona de ocupación militar, hecho que implicó el despliegue de efectivos militares organizados en fuerzas de tarea que se asentaron en la zona de manera permanente montando bases militares principales, secundarias y campamentos militares móviles, muchos de las cuales funcionaron como espacios para la detención clandestina de personas.

Esto marcó una diferencia con los modos de intervención del territorio propios de la "zona capital", que abarcaba San Miguel de Tucumán y sus departamentos aledaños. Allí, la actividad represiva se garantizó a partir de la infraestructura que las fuerzas de seguridad o armada tenían instalada de manera habitual. En el sudoeste, en cambio, este despliegue se hizo en base a una infraestructura montada a tales efectos, que complementó la red de comisarías de la zona.

Para montar esa infraestructura ad hoc el ejército se valió de los mismos espacios que alguna vez articularon las formas de vida y reproducción social de estas comunidades, organizando el trabajo y las relaciones sociales en torno a la producción azucarera. Así, ingenios, escuelas, casas de trabajadores, administraciones de fincas pasaron a ser escenarios donde el terror se instaló como herramienta central de transformación social.

El territorio bajo análisis quedó bajo el control de dos fuerzas de tarea que montaron espacios de detención clandestina de distinta envergadura, según se detalla en el siguiente gráfico:

Imagen 3. Fuerzas de tarea y espacios de detención clandestina.



Fuente: Territorios de Memoria. CEG-Fundación Memoria e Identidades.

La llamada Fuerza de Tarea Rayo tenía jurisdicción sobre la zona de Fronterita. En tierras del ingenio instaló su base militar principal, en la administración de la finca Monte Grande (antigua colonia del ex Ingenio Mercedes, devenida luego finca de la Citrícola San Miguel) funcionó su base militar secundaria y en las localidades Tres Almacenes y Sauce Huascho (antiguas colonias del cerrado ingenio Nueva Baviera), campamentos militares móviles.

La Fuerza de Tarea Aconquija²⁰, bautizada luego como Berdina²¹, controlaba la zona de Santa Lucía. Ocupó el predio de la Compañía Santa Lucía y en las construcciones del ex ingenio instaló su base militar principal. Luego, en la administración de una finca propiedad del Ingenio San Pablo ubicada en Caspinchango, creó su base militar secundaria, mientras que en una escuela ubicada en Las Mesadas instaló un campamento militar móvil.

De este breve racconto se desprende que en los 5 ingenios que tuvieron influencia en la zona hubo instalaciones del Ejército que funcionaron como EDC de distinta envergadura. Los cuatro más grandes

²⁰ Esta Fuerza de Tarea estaba conformada por efectivos del Regimiento de Infantería 19 con asiento en Tucumán y del Regimiento de Infantería de Monte 28 con asiento en Salta. Los jefes de estas unidades dirigían la base militar en turnos rotativos de 30 días.

²¹ Luego de la muerte del subteniente Rodolfo Hernán Berdina, perteneciente al RIM 28, en un confuso enfrentamiento en septiembre de 1975, la fuerza de tarea cambiará su denominación y pasará a llamarse Berdina.

fueron los CCD de Santa Lucía, Nueva Baviera, Fronterita y Caspinchango, que alojaron al menos 149, 123, 53 y 34 secuestrados respectivamente. Le siguen Monte Grande, la Escuela de las Mesadas, Sauce Huascho y Tres Almacenes, con 15, 5, 2 y 2 detenidos registrados respectivamente.

El número de detenidos registrados nos indica un orden de magnitud de los espacios y nos permite, al mismo tiempo, ilustrar la doble funcionalidad que cumplió cada uno de esos lugares, enclavado en el corazón de alguna de las comunidades que supo organizarse en torno al mundo azucarero. Todos estos lugares, cuya existencia era pública y revestía grados de legalidad, ejercían en distintas medidas dos funciones básicas: capturar y recluir personas clandestinamente y ejercer una vigilancia y control sobre la población circundante, que incidía –con distintos grados de violencia física– en todos los aspectos de la vida diaria.

En este sentido, esos lugares que otrora organizaron la vida cotidiana de esas comunidades pasaron a funcionar ahora como los principales espacios productores de ese terror que desorganizaba la cotidianeidad. Lo hicieron, por un lado, mediante una extendida e intensa política de secuestros por la cual la zona considerada concentra el 18% del total de secuestros de la provincia, con la distribución que se observa a continuación:

Tabla 1. Cantidad de personas liberadas, asesinadas y desaparecidas en el territorio bajo estudio según localidad.

Departamento y localidad	Cantidad de víctimas
FAMAILLÁ	91
El Cruce	1
Fronterita	52
La Rinconada	6
Los Laureles	8
Montegrande	14
Sauce Huascho	3
Tres Almacenes	7
MONTEROS	229
Acheral	40
Caspinchango	43
Santa Lucia	146
TOTAL	320

Fuente: Base de datos CEG/FMIT.

Cabe destacar que el 75% de estas víctimas (241) fueron liberadas. Aunque la elevada proporción de sobrevivientes no es un rasgo privativo de esta zona, ni de Tucumán, el porcentaje sí es más elevado que en el resto de la provincia (54%)²². Tanto la intensidad represiva como la mayor incidencia de la sobrevivencia pueden asociarse a la política de ocupación territorial que vivió la zona, donde se combinaron operaciones selectivas de secuestro con otras de carácter masivo, cuya lógica se asemeja más al castigo colectivo²³. Ello contribuyó a intensificar la sensación de ambigüedad y arbitrariedad en el ejercicio del poder punitivo de Estado, construyendo la sensación generalizada de que "secuestraban a cualquiera".

Por otro lado, junto con su función (central o secundaria, según el caso) de detención de personas, esos lugares ejercían en sus alrededores el control de los horarios de circulación, la identidad de las personas que llegaban y salían de las casas, el consumo y tenencia de alimentos, la compra de vestimenta, las reuniones o fiestas de cumpleaños que se realizaban, la leña que se utilizaba, por nombrar solo algunos ejemplos. Esos controles -acompañados por un uso periódico, asistemático y arbitrario de la violencia (que no llegaba necesariamente al secuestro)- generaban el efecto inverso al que producen los mecanismos disciplinarios: en lugar de construir puntos de referencia sólidos para la acción de los sujetos, los destruía. El hogar y su significación como refugio, como territorio personal resguardado quedaba a merced de ataques imprevistos: el puro azar de una bala perdida o un secuestro por tener la luz prendida. El uso de sus casas y sus espacios quedaba en entredicho: les usaban el baño, les sacaban la leña, les controlaban las visitas y debían pedir permiso para hacer una fiesta de cumpleaños. Quedaban afectados, así, los puntos de referencia que le servían al sujeto para construir su mundo y su acción.

En síntesis, la profundidad de la política de secuestros en la zona y la ocupación militar, que extendió las prácticas de coacción y coerción a un universo mucho más vasto que el de las personas secuestradas produjeron una crisis social, en el sentido teórico que venimos señalando. La generalización de la persecución y los castigos, sumados a la arbitrariedad de estos –que combinaron secuestros selectivos contra sujetos más o menos organizados, con castigos colectivos cuyo principio de inteligibilidad era opaco para los pobladores– produjeron una caducidad de las normas con las que los sujetos se movían en el mundo hasta entonces. Frente a un horizonte de amenaza generalizada que involucra la vida y la integridad física, esta crisis generó muchas veces la ruptura de lazos de confianza y el retraimiento como forma imaginaria de protección.

Como venimos señalando, el rol determinante de la agroindustria azucarera en la configuración de las comunidades de la zona se extiende mucho más allá del aspecto económico y, también por eso, los impactos de su crisis traspasaron ampliamente a quienes estaban directamente involucrados en esa actividad. También hemos señalado que las pautas culturales, los procesos organizativos y

²² Los datos producidos por el RUVTE para toda la Argentina indican que lo que inicialmente fue tenido por la norma (la ejecución y posterior desaparición del cuerpo) fue una parte del fenómeno más amplio de la desaparición que incluyó la liberación.

²³ Otro rasgo distintivo asociado con la ocupación militar es el secuestro reiterado de una misma persona. En la zona que analizamos, el 24% de las víctimas fue secuestrada en más de una oportunidad, en el resto de la provincia, en cambio, ese porcentaje desciende al 9%.

las experiencias de lucha forjadas al calor de esta actividad nutrieron procesos organizativos que se gestaron más allá de su ámbito directo de acción. Esta centralidad de la actividad en distintos ámbitos y dimensiones explica también su particularidad incidencia en la política represiva.

Ya hemos señalado que todos los CCD importantes funcionaron en espacios vinculados a la agroindustria azucarera. A esto debemos sumar que el 63% de las víctimas con información sobre ocupación²⁴ trabajaban en la agroindustria azucarera (104) y la actividad rural (34). El impacto de esta actividad se observa al considerar que le siguen, en orden de magnitud, quienes se dedicaban al comercio por menor (15) y al trabajo en la administración pública (11).

En particular, se ha registrado el secuestro de 59 personas que trabajan en el Ingenio Fronterita, 14 de las cuales tenían militancia gremial, incluyendo a quien fuera el secretario general del sindicato y que hoy se encuentra desaparecido²⁵. Y también registramos que al menos 40 víctimas de la zona de Santa Lucía habían trabajado en el ex ingenio, cinco de los cuales habían sido representantes del sindicato, incluyendo a su secretario general (Nassif 2020: 160).

Como consecuencia de esta política, las colonias y pueblos azucareros que otrora habían sufrido los efectos de la migración, por la caída en los niveles de empleos, volvieron a sufrir el impacto del movimiento de población que tuvieron un carácter directa o indirectamente forzado. Más aún, en muchos casos, las migraciones previas -en el contexto del cierre de ingenios- facilitaron las redes utilizadas por quienes se insiliaron para salir de la zona y refugiarse en el anonimato de las grandes ciudades ante amenazas o, incluso, secuestros reiterados²⁶.

Estos movimientos poblacionales incluyeron un nuevo momento en el proceso de reconfiguración de las antiguas colonias azucareras. En Santa Lucía este proceso se inició en 1974, un año antes del Operativo Independencia, en el marco de tres operativos desarrollados por las Fuerzas Armadas y de seguridad con el objetivo declarado de perseguir a la recién instalada guerrilla rural del PRT ERP. La violencia ejercida en esos operativos impactó fuertemente en las poblaciones de Negro Potrero, Colonia Las Dulces y Finca Santa Elena -todas ellas vinculadas a Santa Lucía- generando un lento proceso de desplazamiento de la población. Las amenazas frecuentes llevaron a la pérdida de control territorial de las poblaciones locales. El desplazamiento forzado fue la respuesta más inmediata frente a la situación de amenaza y de terror constante sufridas (Cattaneo 2022). Este proceso de desplazamiento de población tendría su proceso culmine con la fundación, a partir de 1976, de cuatro aldeas estratégicas construidas por los militares a donde fueron llevadas las familias de las zonas

²⁴ Las 220 víctimas con información sobre ocupación representan el 69% del total de 320 casos.

²⁵ Para ver una evolución de estos datos, consultar el Informe de Responsabilidad Empresarial (PVyV et al. 2015: 103) y Nassif 2020 (158). Los números consignados corresponden a la Base de datos Genocidio en Tucumán (1975-1983).

²⁶ La base de datos con la que trabajamos no registra insilios ni exilios por lo que no disponemos de una valoración cuantitativa del fenómeno. Por trabajos de campo de orden cualitativo, sabemos que el fenómeno de la emigración fue extendido y que primó el insilio por sobre el exilio. Trabajamos actualmente en la construcción de estimaciones estadísticas que nos permitan aproximarnos a este impacto desde una perspectiva demográfica, comparando la evolución poblacional entre censos.

aledañas: Sargento Moya, teniente Berdina, Capitán Cáceres y Sargento Maldonado (Colombo 2020; Garaño 2015; Nemec 2017; Salvatore 2020).

En Fronterita, el desarme de las colonias y el traslado de su población también estuvo ligado al ejercicio de la violencia estatal, pero de una manera menos directa. En este caso fue la empresa la que impulsó el despoblamiento de las colonias incitando, invitando o conminando, según el caso, a sus trabajadores a desarmar sus casas y trasladarse a otros parajes. Logró así un objetivo largamente anhelado, que había comenzado a implementar con el desarme de la Colonia 4 en 1969, en el contexto del impacto del cierre de los ingenios aledaños. No existe un dato preciso acerca de la fecha en que se terminaron de desarmar todas las colonias, pero hay coincidencia en que esta política tuvo particular intensidad durante la segunda mitad de los setenta (Jemio, Nassif y Wieder 2024). Este proceso coincidió con la implementación de otra de las políticas impulsadas por el ingenio y resistida por los trabajadores y la FOTIA: la introducción de la máquina cosechadora integral. Su utilización reducía bruscamente la necesidad de contratar mano de obra para las tareas rurales, generando un salto cualitativo en el proceso de mecanización y tecnificación que llevaba al menos una década de lento desarrollo.

Mediante el ataque directo a las organizaciones de trabajadores y sus representantes y a la población de la zona, el ingenio pudo avanzar sin resistencias importantes en una reconversión de su sistema tecnológico que significó, también, una transformación en la estructura de empleo de la actividad, pues generó un proceso de progresiva extinción del trabajo manual en la cosecha.

Así como el cierre de los ingenios implicó un primer momento de reconfiguración de la actividad económica en la región, durante el Operativo Independencia y especialmente la última dictadura se profundizaron los procesos de mecanización y desplazamiento de mano de obra, junto a un aumento de la tercerización que afectó no sólo a la actividad azucarera sino también a la citrícola. Esta última inició importantes transformaciones en este período: fue ganando terreno hasta convertirse en una de las tres actividades económicas más importantes de la provincia en la actualidad y una importante fuente de empleo para la zona bajo análisis. Los antiguos poblados donde se encontraban las colonias azucareras fueron mutando en grandes plantaciones de limón. Un caso paradigmático es Caspinchango, antigua colonia del ingenio Santa Lucia, donde se ubicó en 1976 una finca citrícola y un empaque (Cattaneo 2022).

Lo señalado hasta aquí deja en evidencia, por un lado, la existencia de vínculos inmediatos entre las empresas y las Fuerzas Armadas, cuya expresión más visible (pero no la única) es la instalación de espacios de detención clandestina en los predios de las empresas. Por otro lado, muestra múltiples vasos comunicantes entre los efectos de la represión y las transformaciones en los modelos productivos y laborales de las empresas asentadas en la zona. Todo ello nos habla de una compleja articulación entre actores económicos y fuerzas armadas, que ha sido analizada en algunos casos específicos de Tucumán y ha generado, también, una vasta bibliografía a nivel nacional.²⁷

²⁷ El trabajo más sistemático y abarcativo de esta temática es el Informe Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad. Represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado (PVyJ et al. 2015), que investiga 25 casos de distintas regiones del país, constituyendo una obra de referencia para abordar la temática en Argentina. Entre los casos analizados para Tucumán, destaca el caso del Ingenio La Fronterita, en cuya

En definitiva, y tal como hemos venido señalando, estas transformaciones muestran que el terror fue el epicentro de una crisis social que trajo consigo un conjunto más amplio de mecanismos que produjeron reconfiguraciones y nuevos ordenamientos sociales, culturales, políticos y económicos.

5. Consideraciones finales

En Tucumán, la represión ejercida en los años setenta constituyó el segundo momento de un proceso de transformación social y económica iniciado una década antes. Como hemos señalado, la reconfiguración productiva comenzó en la década de 1960 con el cierre de ingenios azucareros, implementado inicialmente por decreto de la dictadura militar y luego reforzado con la militarización de las fábricas. Este primer momento de crisis económica alteró radicalmente las bases materiales de la vida cotidiana de los trabajadores y sus familias, pero también generó una resistencia colectiva significativa, sostenida en tradiciones organizativas y prácticas de lucha forjadas durante años. Sindicatos, huelgas, congresos de delegados, asambleas en los lugares de trabajo y nuevas instancias organizativas –como las comisiones Pro Defensa o las comisiones de mujeres– fueron expresiones de una resistencia que, aunque no logró evitar el cierre de los ingenios ni sus brutales consecuencias, consiguió paliar algunos de sus efectos y retrasar transformaciones productivas más radicales que serían encaradas luego por las empresas monopolistas y su proyecto de concentración y tecnificación.

El segundo momento se inauguró con el Operativo Independencia y se consolidó durante la última dictadura militar. La violencia estatal sistemática operó aquí como catalizador y habilitador para profundizar los procesos de exclusión, disciplinamiento laboral y tercerización, clausurando repertorios previos de acción y forzando la reconfiguración de las estrategias de supervivencia y resistencia. Las mismas familias que habían padecido el cierre de los ingenios fueron blanco de acciones represivas de niveles inéditos de violencia. Con ello, se consolidó la desarticulación de organizaciones sociales y sindicales y se profundizó el despojo de las poblaciones afectadas.

Ambas crisis produjeron una fractura social y emocional de gran alcance, que desestructuró no sólo las condiciones materiales de vida, sino también los lazos de confianza, los marcos culturales y las formas de sociabilidad que sustentaban la identidad colectiva. Este quiebre, de carácter económico, político, social y afectivo, dejó huellas que perduran en el tiempo.

De este modo, las transformaciones sociales y económicas en Tucumán entre fines de los sesenta y los setenta conformaron un continuum caracterizado por la concentración monopólica de la producción azucarera, la creciente tecnificación y la destrucción de puestos de trabajo. Estos procesos dieron paso a una precarización y tercerización laboral que se generalizó a partir de la década de 1980

propiedad funcionó un CCD, sin que hasta el día de hoy -a más de cuarenta años del retorno del orden constitucional- sus propietarios hayan realizado denuncia al respecto. Este hecho, sumado a otras prácticas empresariales represivas, como la entrega de información estratégica y el suministro de insumos necesarios para la comisión de crímenes, sustenta la investigación judicial en curso sobre la posible responsabilidad de la empresa en delitos de lesa humanidad. En el mismo informe se analiza el caso del Ingenio Concepción y de GRAFANOR en Tucumán.

y cuyas consecuencias persisten hasta hoy. Las crisis, por tanto, no fueron eventos aislados, sino momentos interrelacionados en un proceso de reconfiguración del orden económico y social en el que la violencia estatal se constituyó en motor y herramienta central. En suma, no sólo operó como un instrumento de represión política, sino también como un dispositivo clave para la reestructuración del modelo productivo y del orden social.

Bibliografía

- Basualdo, Eduardo. 2010. *Estudios de historia económica argentina. Desde mediados del siglo XX a la actualidad*. Buenos Aires: Siglo Veintiuno.
- Batista Zamora, Ana Ester. 2014. «Una propuesta de clasificación tipológica de los exportadores de limón fresco de la provincia de Tucumán (Argentina)». *Estudios Geográficos* 75 (276): 373-83.
- Bravo, María Celia y Lichtmajer Leandro. 2019. «Las formas locales de confrontación y articulación social frente a la crisis azucarera. La Comisión Pro Defensa del ingenio Bella Vista (Tucumán, 1965-1970)». *Cuadernos de Historia. Serie economía y sociedad*, 23: 63 a 90.
- Boneo, Horacio, Marcelo Cavarozzi, Néstor Lavergne, y Guillermo Picabea. 1973. *Análisis y evaluación del plan de transformación agro-industrial de la provincia de Tucumán, Informe Final, Serie Técnica No 17*. Ediciones de Consejo Federal de Inversiones.
- Bustelo, Julieta Anahí. 2017. «Peronismo y cooperativismo agrario: El caso de los plantadores de caña de la agroindustria azucarera de Tucumán (1946-1955)». *Estudios Rurales* 7 (13). <https://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/estudios-rurales/article/view/11675>
- Cámara General de Productores de Azúcar de Tucumán. 1977. «Miscelánea azucarera 1977». Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería. Ministerio de Economía.
- Canitrot, Adolfo, y Juan Sommer. 1972. *Diagnóstico de la situación económica de la provincia de Tucumán, Buenos Aires*. Buenos Aires: Instituto Torcuato Di Tella.
- Cattaneo, Constanza, et al. 2019. «Las doctrinas militares: la represión política en Tucumán, Argentina (1975-1983)». *Kamchatka. Revista de análisis cultural* 13: 373-394.
- Cattaneo, Constanza. 2022. «"Colonias desaparecidas": el impacto socioterritorial de la violencia en el ámbito rural de la provincia de Tucumán (1975-1983)». *Folia Histórica del Nordeste*, (45) (diciembre).
- _____. 2023. «Cartografiando memorias de la resistencia: la movilización de los trabajadores del ingenio Santa Lucía en la década del sesenta, Tucumán-Argentina (1966-1970)». *RURIS, Campinas, SP* 15 (2): 212-241.
- Ceballos, María Beatriz. 2000. «La migración tucumana en el período 1960-1970». Cuaderno N° 88. Instituto de Investigaciones Estadísticas, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Tucumán.
- Ciulli, Karina Gabriela. 2023. Ruinas industriales y memorias del ocaso azucarero en el sur tucumano. Un abordaje antropológico. *Cuadernos de antropología social*, núm. 57, 2023, Mayo-Octubre, pp. 131-149 DOI: <https://doi.org/10.34096/cas.i57.12167>
- Colombo, Pamela. 2020. «Desde el interior de los pueblos estratégicos de Tucumán: contrainsurgencia, desplazamiento de población y urbanización forzada». *Mundo de antes* 14 (2): 175-209.
- Consejo Federal de Inversiones. 1973. «Análisis y evaluación del plan de transformación agroindustrial de la provincia de Tucumán. Informe final». 17. Serie Técnica. Buenos Aires: Consejo Federal de Inversiones.
- Corradi, Juan. 1996. «El método de destrucción. El terror en la Argentina». En H. Quiroga & C. Tcach (Eds.), *A veinte años del golpe: Con memoria democrática*. Homo Sapiens.
- Decreto Secreto N.º 261/75 emitido por el Poder Ejecutivo Nacional el 5 de febrero de 1975
- Eidelman, Ariel. 2010. *El desarrollo de los aparatos represivos del Estado argentino durante la «Revolución Argentina», 1966-1973* [Tesis de Doctorado]. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Buenos Aires.
- Franco, Marina. 2012. *Un enemigo para la nación. Orden interno, violencia y «subversión», 1973-1976*. Fondo de Cultura Económica.
- Garaño, Santiago. 2015. «La construcción de los cuatro pueblos en el pedemonte tucumano: la apuesta productiva del Operativo Independencia (Tucumán, 1975-1977)». *Avances del Cesor* 12 (12): 157-70.
- Garaño, Santiago y Concha Bocanegra, Ana (Eds.). 2022. *Operativo Independencia: Geografías, actores y tramas*. Tucumán: EDUNT.
- Giarracca, Norma et al. 1995. *Agroindustrias del Noroeste el papel de los actores sociales*. La Colmena.
- Gianfrancisco, María Soledad. 2021. «La familia empresa en el contexto de la agroindustria azucarera: el caso de los Nougues (1821 - 1986)». *Temas de Historia Argentina y Americana* 2 (29).
- Giarracca, norma et al. 1995 *Agroindustrias en el noroeste. El papel de los actores sociales* (buenos Aires: La Colmena).

- Gramsci, Antonio. 1930 [2023]. *Cuadernos de la cárcel III*. Ediciones Akal.
- Jemio, Ana Sofía. 2021a. *Tras las huellas del terror. El Operativo Independencia y el comienzo del genocidio*. Buenos Aires: Prometeo.
- _____. 2021b. "Una revisión crítica del concepto "Estado terrorista"". *Sociohistórica. Cuadernos del CISH*, 48, e145.
- _____. 2022a. "Del comunismo a la subversión: El enemigo interno en los reglamentos del Ejército Argentino (1964-1977)". *Secuencia*, 112, Article 112.
- _____. 2022b. "Los trabajadores de la finca Monte Grande (Tucumán, Argentina). De la reconversión productiva al genocidio (1966-1976)". *Revista Izquierdas* 52.
- _____. 2022c. "¿Qué buscó destruir el genocidio? La historia de los obreros de Norwinco (Tucumán, Argentina, 1975-1976)". *Esboços: histórias em contextos globais*, 29 (50).
- Jemio, Ana Sofía, Nassif Silvia, y Wieder, Daniela. 2025. *Fronterita cuenta su historia*. Tucumán: Humanitas.
- Juárez, Facundo Leonel. 2018. «El cierre de los ingenios tucumanos, 1966-1967. El caso del Ingenio Mercedes». Mendoza. *La Gaceta*, 7 de septiembre de 1968.
- Lowenthal, Leo. 2013. "El terrorismo y su atomización del hombre". *Revista de estudios sobre genocidio* 8.
- Medina, Ramón. 1974. «Análisis cuantitativo de la economía de Tucumán en el período 1966-71». Serie Investigaciones, Cátedra de Estadística, Facultad de Ciencias Económicas – UNT.
- Mercado, Lucía. 2007. *El gallo negro. Vida, pasión y muerte de un ingenio azucarero*. Buenos Aires: Edición de la autora.
- Murmis, Miguel y Waisman, Carlos. 1969. "Monoproducción agroindustrial, crisis y clase obrera, la industria azucarera tucumana". *Revista Latinoamericana de Sociología*, 1: 344-383.
- Nassif, Silvia. 2015. *Las luchas obreras tucumanas durante la autodenominada Revolución Argentina (1966-1973)*. Tesis para obtener el título de Doctora en Historia, Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires.
- _____. 2021. *La incidencia en la subjetividad de trabajadores azucareros de las políticas de cierre de ingenios y del terrorismo de Estado*. Tesis para obtener el título de Magister en Psicología Social, Tucumán: UNT.
- _____. 2015. «Protagonistas olvidados: las luchas obreras en Tucumán en los años '60 y principios de los '70».
- _____. 2016. *Tucumán en llamas: el cierre de ingenios y la lucha obrera contra la dictadura (1966-1973)*. Tucumán: Universidad Nacional de Tucumán, Facultad de Filosofía y Letras.
- _____. 2018. «La huelga azucarera de septiembre de 1974 en Tucumán: un hito del movimiento obrero durante el tercer gobierno peronista». *Población & Sociedad* 25 (2).
- _____. 2017. «Resistencia obrera y popular en Tucumán en los inicios de la dictadura de Onganía: asesinato de Hilda Guerrero de Molina y poblada en Bella Vista». *Trabajo y Sociedad* 29.
- _____. julio-diciembre 2020. «Terrorismo de Estado y disciplinamiento de los sindicatos azucareros tucumanos: Reconstrucción del colectivo de víctimas obreras y sus desafíos metodológicos». *Mundo de Antes* 14 (2): 139-74.
- Nemec, Diego. 2017. *Pueblos de la "guerra". Pueblos de la "paz". Los pueblos rurales construidos durante el "Operativo Independencia" (Tucumán 1976-1977)*. Tesis de Maestría, Universidad Nacional de San Martín.
- O' Donnell, Guillermo. 1982. *1966-1973 El Estado Burocrático Autoritario. Triunfos, derrotas y crisis*. Buenos Aires: Editorial de Belgrano.
- Osatinsky Ariel y Paolasso, Pablo. 2012. "La industria en la provincia de Tucumán: de la expansión azucarera a la desindustrialización". En *Industria y Sociedad. El sector manufacturero en Jujuy y Argentina*, editado por Liliana Bergesio y Laura Golovanesky. EdiUnju.
- Paterlini de Koch, Olga. 1987. *Pueblos azucareros de Tucumán*. Editorial del Instituto Argentino de Investigaciones de Historia de la Arquitectura y del Urbanismo.
- Périès, Gabriel. 2009. "De Argelia a la Argentina: Estudio comparativo sobre la internacionalización de las doctrinas militares francesas en la lucha antisubversiva. Enfoque institucional y discursivo". En I. Izaguirre (Ed.), *Lucha de clases, guerra civil y genocidio en la Argentina. 1973-1983*. 391-421. EUDEBA.
- Programa Verdad y Justicia de la Nación (PVyJ), Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (SDH), Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). 2015. *Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad. Represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado*, Tomo I. Buenos Aires, Argentina: Editorial Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
- Portantiero, Juan Carlos. 1977. "Economía y política en la crisis argentina 1958-1973". *Revista Mexicana de Sociología*, (2): 531-565.
- Pontoriero, Esteban. 2022. *Represión militar en la Argentina (1955-1976)*. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.
- Pucci, Roberto. 2007. *Historia de la destrucción de una provincia. Tucumán 1966*. Buenos Aires: Ediciones del Pago Chico.
- Quiroga, Ana. 1998. *Crisis, Procesos sociales, Sujeto y Grupo. Desarrollo en Psicología Social a partir del pensamiento de Enrique Pichón-Rivière*. Ediciones Cinco.
- Rapoport, Mario y Spiguel, Claudio. 2005. *Política exterior Argentina. Poder y conflictos internos (1880- 2001)*. Buenos Aires: Capital Intelectual.

- Rosenzvaig, Eduardo. 1989. *Santa Ana: un modelo de cultura rural, Tucumán*. Argentina: Instituto de Artes Plásticas-Aguilares.
- Salazar, Antonio y Valeros, Manuel Roberto (Comps.). 2012. *Notas sobre la historia de Bella Vista*. Tucumán: Autoedición
- Salvatore, Bruno. 2020. «De la colonia al poblado. Algunos modos de vivir en el sudoeste de la Provincia de Tucumán durante los años del Operativo Independencia y última dictadura militar (1975/1983)». *Mundo de antes* 14 (2): 175-209.
- Santos, Milton. 2000. *La naturaleza del espacio. Técnica y tiempo, razón y emoción*. Editorial Ariel.
- Schorr, Martin. 2021. *El Viejo y el Nuevo Poder Económico en la Argentina: Del Siglo XIX a Nuestros Días* (1st ed.). Siglo XXI Editores.
- Secretaría de Estado y Planeamiento y Coordinación. 1977. «Tucumán en cifras». Estadísticas. Tucumán.
- Sigal, Silvia. 1973. «Acción obrera en una situación de crisis: Tucumán 1966-1968». *Revista Mexicana de Sociología* 40 (2): 375.
- Taboada, María Stella y Lobo, Héctor Ángel. 1996. *Los dueños de la zafra. Vida y trabajo en un ingenio azucarero*. Tucumán: CERPACU, Universidad Nacional de Tucumán.
- Taire, Marcos. 2008. *El último grito. 1974: crónica de la huelga de los obreros tucumanos de la FOTIA*. Buenos Aires: Lumiere.
- Tarditi, Roberto J. y Jorge Podestá. 1998. «Apuntes teórico metodológicos para el estudio de las crisis: el aporte de Antonio Gramsci». PIMSA.